



Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00064-00
ACCIONANTE: DAVID PÉREZ ARIAS
ACCIONADA: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1°, inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **DAVID PÉREZ ARIAS** identificado con cédula de ciudadanía 1.037.630.388; en contra de la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP**, en procura de la protección a los derechos fundamentales que denominó seguridad personal, vida, integridad personal, educación, trabajo digno y libre desarrollo de la personalidad.

2. Por otra parte, se avizora que el aquí tutelante formuló una solicitud de medida provisional, encaminada a que se ordene a la Unidad Nacional de Protección prestar y/o coordinar el servicio de seguridad a su favor, consistente en un medio de transporte seguro (vehículo blindado) y un (1) hombre más de protección asignado, con el propósito de que no se vulneren sus derechos fundamentales señalados en precedencia.

3. La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente. Dichos presupuestos son los siguientes:

- (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).
- (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).
- (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

4. En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió “*como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo*”. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo. Por tal razón, la solicitud de medida provisional “*debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el*



expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

5. Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como *“un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”*.¹

6. En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, *“la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”*

7. Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que *“si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”*.

8. Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que se reúnen las condiciones necesarias para acceder, parcialmente, la medida cautelar solicitada, sin que ello implique prejuzgamiento.

9. En cuanto a la apariencia de buen derecho, el Juzgado constata que el demandante es activista y líder social. Así se pudo establecer luego de una consulta en la internet en la que se constató que el actor es *“Coordinador del movimiento ciudadano No Matarás. Miembro del equipo coordinador de Lunes de Ciudad. Vocero de la iniciativa Jóvenes y ODS. Miembro del equipo impulsor de la Alianza Intersectorial Pa´ Dónde Vamos. Consejero del Consejo Consultivo LGBTI de Medellín. Miembro del movimiento ciudadano Defendamos la Paz. Miembro de la*

¹ *Ibídem.*



Veeduría Ciudadana Todos X Medellín²”. De igual manera, los elementos de convicción aportados con la tutela, valorados a la luz del artículo 83 Constitucional, ponen en evidencia al Despacho que el actor en reiteradas oportunidades ha sido amenazado de muerte por grupos violentos, entre ellos los comúnmente denominados como *Águilas Negras*. El Despacho constata que el actor solicitó protección a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos por amenazas de estos grupos y la Unidad Nacional de Protección emitió la Resolución No. 9908 del 17 de diciembre de 2021, resolviendo, entre otros asuntos, adoptar medidas de resguardo a favor del actor, consistentes en concederle un hombre de protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

10. En cuanto al segundo presupuesto, el Juzgado advierte que, con posterioridad al otorgamiento de tales medidas de protección, el accionante presuntamente ha recibido nuevas amenazas de muerte a través de redes sociales, siendo la última, el 24 de febrero del año en curso. Según el escrito de tutela, tal situación conllevó a desplazarse de manera forzada de la ciudad de Medellín a la capital del país, lo cual presuntamente le ha impedido proseguir con sus estudios en la Universidad de Antioquía.

Esta situación, a juicio del Juzgado, conlleva a sostener que la no adopción de una medida cautelar en este caso, además de generar un grave riesgo la vida del demandante, también amenaza dos componentes del derecho fundamental a la educación como son la *accesibilidad* y la *adaptabilidad*, en tanto impide que el actor desarrolle su proyecto de vida sin presiones y violencia. Así entonces, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales argüidos por éste, esta Agencia Judicial procederá a conceder la medida provisional de la referencia.

11. El Juzgado considera que la entrega del vehículo solicitada por el actor no ocasionaría un perjuicio grave e irreparable al actor, por lo que resulta proporcionada. La asignación de un miembro más a su equipo de seguridad, *prima facie*, no resulta una medida idónea para conjurar las amenazas que se ciernen sobre el interesado, en la medida en que los hechos de la tutela demuestran que tiene asignado un miembro de la UNP para su protección.

Por consiguiente, se dispone:

1. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal de la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP** y/o quien haga sus veces, a quien se le enviará copia de la tutela y sus anexos para que dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de su recibo, se refiera sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta.

2. Hágase la salvedad referente a que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad, informando tal situación al Despacho.

² <https://www.lasillavacia.com/la-silla-llena/expertos/perfil/3306>.



3. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.
4. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.
5. **DECRETAR MEDIDA CAUTELAR** a favor del señor David Pérez Arias identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.630.388, acorde con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído; en consecuencia, se **ORDENA** a la entidad accionada que de manera inmediata, esto es, una vez notificado del presente auto; proceda a conceder al demandante un vehículo blindado para su protección personal; para lo cual deberá allegar los respectivos soportes que permitan dar certeza de ello.
6. **REQUERIR** a la Unidad Nacional de Protección – UNP, para que en el término perentorio de dos (02) días, siguientes a la notificación del presente auto, allegue con destino al expediente de la referencia, un informe en el que indique de forma detallada si tiene conocimiento de las últimas amenazas que ha recibido el aquí demandante, esto, con posterioridad a que fue proferida la Resolución No. 9908 del 17 de diciembre de 2021, y si el accionante les ha solicitado un vehículo blindado y un hombre más de protección.
7. **REQUERIR** a la Defensoría del Pueblo para en un plazo máximo de dos (02) días siguientes a la notificación del auto, envíe los reportes o alertas tempranas sobre la situación de seguridad para los líderes de derechos humanos en el Departamento de Antioquia, en particular para los miembros de la comunidad LGBTIQ y líderes estudiantiles.
8. **REQUERIR** a la Universidad de Antioquia para en un plazo máximo de dos (02) días siguientes a la notificación del auto, certifique si el señor David Pérez Arias identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.630.388 se encuentra inscrito como estudiante de dicho centro universitario.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tendientes a la mitigación del COVID 19, los documentos, respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección admin10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

JGR